

GRANADOS CHAPA

El incendio en la guardería ABC lastimó al gobernador de Sonora, Eduardo Bours, no sólo por los vínculos revelados sobre los propietarios de la misma con el mandatario, sino porque puede afectar los planes del sonorense de contender en el 2012 por la Presidencia.

PLAZA PÚBLICA

Yo con Sonora

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Dos semanas después del grave crimen que mató a 46 niños y mantiene en el dolor permanente a decenas de chiquitos más, y en la angustia para siempre a madres y padres de los muertos y los supervivientes, fueron consignadas 13 personas, a las que la Procuraduría de justicia del estado imputa responsabilidades en el incendio del 5 de junio, originado en una bodega contigua a la guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social a una empresa (con forma jurídica de sociedad civil) que durante años hizo funcionar ese establecimiento al margen de la ley pero contando con autorizaciones y hasta complacencia de funcionarios del propio IMSS y los gobiernos de Sonora y de Hermosillo.

Hasta donde pudo saberse (e información más precisa podrán tenerla los lectores de esta columna en la misma edición dominical de su diario), la acción penal acordada por el Ministerio Público local comprende a los dueños y administradores de la guardería, así como a servidores públicos municipales y estatales y aun de la Federación.

El que hubieran transcurrido 15 días para que se expusiera el caso ante el Poder Judicial local se explica por la tensión que ha cruzado al gobierno de Eduardo Bours, que tomó a su cargo la averiguación previa no obstante que el homicidio de los niños acaeció en un establecimiento que prestaba servicios que por ley debe cumplir un organismo federal. Por un lado, las familias de las víctimas, y porciones de la sociedad civil animadas por una

justa indignación ante la atrocidad del suceso, han exigido la justicia pronta que es menester en todo caso y urge en mayor medida en éste por la naturaleza del delito. En sentido contrario, los compromisos políticos del gobernador con los propietarios de la guardería y del local donde ésta funcionaba constituían un lastre para la tarea ministerial, pues entre los

presuntos consignados figuran personas allegadas al gobernador, y una de ellas unida por un parentesco lejano con la esposa del presidente Calderón, la señora Margarita Zavala, que ha viajado varias veces a Hermosillo a condolerse con los deudos de las víctimas y a acompañar a madres y padres de quienes quedaron gravemente heridos.

Seguramente contó entre los factores que aconsejaban apresurar la consignación de responsables la propuesta que el jueves 18 dirigió al presidente de la República el senador sonorense Javier Castelo Parada para la creación de una Fiscalía especial que investigue este caso. Con la consignación practicada el viernes la propuesta queda sin materia, pero no pierde su motivación. Obregonense como el gobernador, y quizá emparentado con él (por la vía de los Castelo), el legislador denunció las "lentas y parciales investigaciones realizadas por la Procuraduría del estado de Sonora en torno al incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, tragedia que a la fecha ha costado la vida de 46 niños y tiene molestos y desesperados a los familiares de los niños y a toda la sociedad, no sólo sonorense sino de todo México".

La propuesta de Castelo Parada era de imposible realización práctica porque contraviene expresas disposiciones legales. La averiguación previa de los delitos es función exclusiva del Ministerio Público, y el sena-



dor sonorenses propuso que la Fiscalía especial recomendada fuera "supervisada por el Poder Legislativo federal y un consejo ciudadano". Añadió que por "la exigencia y reclamo de información de parte de los deudos sino de toda la opinión pública, sugiero que la Fiscalía especial le informe al inicio cada quince días y posteriormente mensualmente al Poder Legislativo, previa discusión con el consejo ciudadano, sobre los avances de la investigación".

(Digamos, de paso, que en abstracto la idea de una fiscalía especial es atractiva porque supone la puesta a disposición de un funcionario específicamente responsabilizado, de los recursos ministeriales adecuados para establecer el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad de los autores de un ilícito. En la práctica, sin embargo, los gobiernos panistas han convertido esa idea en un fiasco. Fueron creadas en la PGR sendas fiscalías especiales para la atención no de un caso en particular sino los delitos que se cometen contra mujeres, por una parte, y contra periodistas, por la otra. Ninguna ha tenido un desempeño apreciable y que contribuya a la localización y castigo de delincuentes en esos campos, y sólo han servido como mamparas demagógicas que pretenden hacer creer que esa clase de delitos preocupan especialmente al Ejecutivo).

Al margen de la actuación ministerial, las dos semanas corridas desde la tragedia del 5 de junio han servido para que se despliegue una batalla de imputaciones recíprocas entre los gobiernos federal y local. Probablemente con la intención de evitar que eso ocurriera, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, viajó

a Hermosillo el viernes 12, una semana después de cometido el crimen colectivo. Se entrevistó con el gobernador Bours Castelo y al cabo de la reunión, cada uno por su parte, coincidieron en demandar que no se politice el caso. La petición es imposible de atender si se da a la palabra política su verdadera

valor, nacido de su origen. El caso es por naturaleza político, porque implica a los gobernantes y a los gobernados, porque pone al descubierto un sistema de poder feudal y patrimonialista que reparte canonjías entre los miembros de oligarquías regionales que giran alrededor del poder institucional. El llamado es además difícil de aplicarse en una entidad donde el próximo 5 de julio se renuevan los ayuntamientos y los poderes Ejecutivo y Legislativo. Y si bien la contienda por la

gubernatura se da en familia (los candidatos del PRI y del PAN son primos) en este tramo de la campaña se exponen ante los votantes los resultados de la gestión pública de los aspirantes a gobernar desde diversas posiciones.

El propio Bours ha politizado el caso y hasta llamó gusanos a quienes lo hacen pero desde una perspectiva distinta a la suya. Y ha propiciado o admitido una guerra sucia que aleje de su gobierno responsabilidades en este caso. Haciéndose pasar por representante de los Shriners en Sonora, el señor Alberto Barreda Robinson embistió con furia contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, su director, Daniel Karam, y los médicos de Guadalajara, especialistas en atención de personas quemadas, que han atendido a algunos de los niños que padecieron el infortunio de estar el 5 de junio no en un lugar donde se les cuidara sino donde se les almacenaba como cosas.

El segundo apellido del furibundo declarante coincide con el del gobernador, que ha prescindido de él (le imputan haber explicado

que lo dejó de lado porque es apellido de negros), aunque oficialmente se llama José Eduardo Robinson-Bours Castelo, y uno de sus hijos, Alberto Barreda Astiazarán trabaja para el gobierno del estado, como director de administración de la secretaría de Salud local.

La furia de Barreda Robinson tuvo que ser aplacada por los Shriners de Sacramento, que negaron que el declarante tuviera algo que ver con ellos. El alegato desmentido consistía en afirmar que los niños quemados, entre ellos los que fallecieron con posterioridad al viernes trágico, hubieran sido mejor tratados en aquella institución de asistencia privada, que goza de gran reputación, que en manos de los "estúpidos médicos" mexicanos, como llegó a llamarlos Barreda Robinson.

El crimen del 5 de junio lastimó a Bours Castelo no sólo, y quizá no tanto, por su propia naturaleza y dimensiones, sino porque estorba sus planes para contender en 2012 por la Presidencia de la República. Ha estado trabajando en esa dirección hace tiempo, desde que convirtió el grupo Yo con Bours, en que se basó para llegar a la gubernatura, en una asociación civil denominada Yo con Sonora, cuyo presidente es Juan Carlos Lam Félix, el colaborador más cercano y más antiguo del gobernador: fue su secretario particular en los años en que Bours presidió el Consejo Coordinador Empresarial y en su sexenio sonorenses fue secretario técnico del gabinete.

En marzo pasado Yo con Sonora organizó un magno acto de relaciones públicas, una Cumbre Política cuyo tema fue Una nueva manera de hacer política 2009, en que participaron Pedro Ferriz de Con, Héctor Aguilar Camín, Roy Campos, Leo Zuckerman, Eduardo Robledo y Federico Reyes Heróles.

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

A pesar de que la guardería incendiada en Hermosillo tenía su origen en un contrato de subrogación de servicios de una dependencia federal, la Procuraduría del estado de Sonora es la que ha realizado las investigaciones del caso.